

Título: El retroceso silencioso de la educación inicial

(11,7%) y Biobío (3,3%), nos sitúa como región en un foco de preocupación a nivel nacional.

Si bien Biobío mantuvo la misma cantidad de víctimas de homicidios consumados entre 2023 y 2024, con 112 casos en ambos años, la persistencia de esta cifra, sumada a la alta proporción a nivel nacional, no puede ser motivo de consuelo. La evolución del número de estos delitos en los últimos siete años

resuma la necesidad de contar con políticas públicas integrales que aborden las problemáticas sociales subyacentes a la criminalidad, como la falta de oportunidades, la exclusión y el acceso a drogas y armas.

Respuestas de corto, mediano y largo plazo deben avanzar paralelamente si queremos de una vez por todas marcar un cambio de tendencia en una evolución criminal que debe preocuparnos a todos.



El retroceso silencioso de la educación inicial

Claudia Fuentes Riveros
prensa@latribuna.cl

Mientras la política nacional sigue atrapada en urgencias de corto plazo, se está consolidando un retroceso silencioso pero profundo: la caída en la cobertura y asistencia en niveles de educación inicial.

Según datos del reciente informe de la Fundación Familias Primero, entre 2017 y 2023 la matrícula de pre-kínder en nuestro país cayó un 16,4%, cifra que en la región del Biobío, es aún más preocupante.

Los datos regionales revelan que la región es una de las zonas más afectadas por la disminución de la cobertura en educación parvularia. Si bien la pandemia explica parte de esta baja, el problema es estructural y sostenido en el tiempo. En 2017, el porcentaje de cobertura en pre-kínder bordeaba el 85%; para 2023, cayó a poco más del 70%. Esta baja

no es solo una cifra: es un retroceso en el derecho a la educación y en las oportunidades de desarrollo de niños y niñas.

Un impacto que se puede analizar con doble mirada, por un lado, afecta directamente a los párvulos, que ven limitadas sus posibilidades de socialización, estimulación temprana y preparación para la educación formal; y por otro, recae sobre las familias, especialmente las más vulnerables, que no cuentan con redes de apoyo ni alternativas para el cuidado infantil.

El resultado es una profundización de las brechas sociales, que en Biobío ya son amplias: más de un 20% de los hogares se encuentran en situación de pobreza multidimensional, según el Informe de

Caracterización de la Fundación Familias Primero.

Estudios nacionales e internacionales coinciden en que los primeros años son clave para el desarrollo cognitivo y socioemocional, por tanto, postergar o privar ese derecho a niñas y niños del Biobío y todo el país, solo perpetúa las desigualdades que tanto nos cuesta reducir después.

No basta con construir jardines infantiles o abrir matrículas, actualmente el problema está en la asistencia efectiva y las causas son múltiples: desde barreras geográficas hasta desconfianza de las familias en la calidad del servicio, pasando por dificultades económicas o falta de redes comunitarias.

Es urgente reinstalar el valor de la educación inicial como un derecho y una prioridad pública, y esto implica campañas de información, acompañamiento familiar y articulación territorial. Además, se requiere mejorar las condiciones de los establecimientos, asegurando calidad pedagógica, infraestructura adecuada y personal capacitado, y por sobre todo, es necesario contar con políticas públicas que miren más allá de las cifras globales, sino en las particularidades de cada región.

Recuperar la asistencia y cobertura es más que una meta educativa, es una deuda con la niñez, con el futuro y con la equidad territorial.